

**Consejo Económico y Social**

Distr. general
29 de junio de 1999
Español
Original: inglés

Período de sesiones sustantivo de 1999

Ginebra, 5 a 30 de julio de 1999

Tema 14 h) del programa

**Cuestiones sociales y de derechos humanos:
cuestiones de derechos humanos**

**Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos****Índice**

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–8	3
II. Fortalecer los compromisos en materia de derechos económicos, sociales y culturales	9–14	4
Ratificaciones	9–11	4
Contenido de las obligaciones	12–13	5
Declaración sobre el derecho al desarrollo	14	6
III. Fortalecimiento de la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales	15–27	6
Determinación de las necesidades	15–16	6
Órganos intergubernamentales	17–20	6
Órganos creados en virtud de tratados	21–24	7
Nuevos criterios metodológicos	25–27	8
IV. Asistencia a los Estados en la labor de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales	28–32	9
V. Establecimiento de asociaciones de colaboración	33–54	10
Cooperación internacional	33–34	10
Integración de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema de las Naciones Unidas	35–42	11

Cooperación regional	43–45	12
Cooperación con la sociedad civil	46–49	13
Cooperación con el sector empresarial	50–54	14
VI. Conclusiones	55–58	15

I. Introducción

1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 48/141 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993. Su contenido se centra en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos instó a que se fortaleciera el disfrute de esos derechos y recomendó que se hiciera un esfuerzo concertado para garantizar su reconocimiento a nivel nacional, regional e internacional. Dos años después, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, los Estados se comprometieron a promover la integración social sobre la base del fortalecimiento de la protección de todos los derechos humanos. Desde que asumió sus funciones, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha destacado que uno de sus principales objetivos es basarse en esos compromisos.

2. La conmemoración del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos proporcionó una oportunidad ideal para examinar con nuevos ojos la visión de la dignidad inherente de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana consagrados en la Declaración. En la Declaración y el Programa de Acción de Viena se reiteró enérgicamente que todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, eran interdependientes y estaban relacionados entre sí. Tras 50 años de experiencia provechosa, resulta cada vez más claro que todos los derechos humanos deben respetarse con el mismo grado de afirmación y convicción — la libertad de expresión y de creencia, así como el derecho a librarse del temor y de la miseria; el derecho a un juicio imparcial y el derecho a un gobierno representativo y de participación, conjuntamente con los derechos al trabajo, la protección de la salud y la educación.

3. A escala internacional y nacional, se ha alcanzado cierto progreso en cuanto a reforzar la visión fundadora de los redactores de la declaración universal, consagrada en su artículo 22, que proclama: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Ejemplos de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional pueden encontrarse en las resoluciones y los nuevos mandatos de la Comisión de Derechos Humanos; en las aclaraciones adicionales del contenido de derechos concretos realizadas por los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados, y el fortalecimiento de las actividades llevadas a cabo por componentes del sistema de

las Naciones Unidas y por otras organizaciones internacionales para mejorar el ejercicio efectivo de los derechos humanos en la vida de las personas.

4. Sin embargo, pese a los progresos alcanzados, sigue siendo dolorosamente claro que los derechos fundamentales a condiciones decentes de vida, los alimentos, la atención básica de la salud y la educación, todos ellos estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están siendo denegados en gran medida. Para confirmarlo, sólo basta con consultar los últimos datos de las Naciones Unidas. En el informe de 1999 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre el estado mundial de la infancia se señala que cerca de 1.000 millones de personas, una sexta parte de la humanidad, son analfabetos funcionales y van a entrar en el siglo XXI sin los conocimientos necesarios para leer un libro o firmar con su nombre. Dos terceras partes de esa cifra son mujeres. En el informe anual correspondiente a 1998 del Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos se señala que, aunque hay alimentos suficientes para alimentar a la población del mundo, 830 millones de personas padecen de desnutrición crónica. Vivimos en un mundo en que los alimentos se descomponen, mientras que las personas pasan hambre. En el Informe sobre Desarrollo Humano 1998, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se señala la triste realidad de que, de los 4.400 millones de habitantes de los países en desarrollo, casi tres quintas partes carecen de acceso al saneamiento básico, casi una tercera parte no tiene acceso a agua limpia, una cuarta parte no tiene una vivienda adecuada, una quinta parte no tiene acceso a servicios modernos de salud, una quinta parte de los niños no asiste a la escuela y aproximadamente una quinta parte no tiene suficiente energía y proteínas en su dieta.

5. Una esfera de especial urgencia es la erradicación de la extrema pobreza. En el último informe del Banco Mundial se indica que la última crisis financiera y económica ha arrojado a la pobreza — que el Banco Mundial mide en términos de ingresos inferiores a 1 dólar de los Estados Unidos por día — a un número considerable de personas. Las víctimas de la pobreza se ven privadas de hecho de casi todos sus derechos, no sólo a la alimentación, la atención de la salud y una vivienda adecuadas, sino también a participar en procesos políticos; del acceso a la información y la educación; de un tratamiento jurídico equitativo y de los beneficios normales de los ciudadanos. Esas condiciones se agravan para los grupos más vulnerables, en particular los niños y las mujeres, que en algunas partes del mundo son explotados cada vez más mediante la trata, el trabajo forzado y la prostitución. En el informe del Banco se hace referencia al fracaso de las estrategias económicas actuales en la lucha

contra la pobreza y se aboga por la adopción de nuevos criterios de carácter social.

6. La mundialización de los mercados, los capitales, las comunicaciones y la tecnología está modificando el planeta, ofreciendo nuevas oportunidades y creando nuevos retos. Si bien es innegable que esas transformaciones han beneficiado a millones de personas en todas las regiones, también lo es el hecho de que una parte considerable de la población mundial esté siendo empujada hacia los márgenes de la sociedad desde el punto de vista económico y social, debido en parte a este proceso complejo. En los países en desarrollo al igual que en los países desarrollados hay que hacer frente a una tendencia que se perfila claramente con arreglo a la cual un porcentaje menor de la población recibe una mayor parte de las riquezas, al tiempo que los más pobres pierden terreno. La eficacia de las medidas para luchar contra la pobreza y hacer que el sistema mundial funcione para todos entraña la adopción de decisiones difíciles por parte de los gobiernos, que deben atender a prioridades económicas y sociales en conflicto, y de la comunidad internacional, que debe hacer una utilización apropiada de los limitados recursos de que dispone. Sin embargo, esas medidas pueden y deben tomarse insertando firmemente el proceso de adopción de decisiones en el contexto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

7. Sin lugar a dudas, aún es necesario realizar esfuerzos en gran escala para eliminar los obstáculos que entorpecen el cumplimiento de los compromisos y el aporte de los recursos orientados a garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y para fortalecer ese proceso. En 1999 se conmemora el décimo aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que proporciona una ocasión adecuada para centrar la atención mundial en las dificultades que encaran los niños en todo el mundo. La comunidad internacional debería trabajar conjuntamente con el UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño y todas las demás instituciones que se han propuesto no solamente llevar a los niños un rayo de esperanza, sino garantizar el respeto de sus legítimos derechos. La elaboración y adopción de medidas con el objetivo de fomentar el acceso a la educación, la protección de la salud y un entorno social que propicie el desarrollo humano sostenible deben considerarse objetivos comunes que han de alcanzarse en beneficio de todos los niños.

8. En este informe se presenta un panorama general de los últimos acontecimientos de importancia relacionados con la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel internacional. El Consejo Económico y Social, sacando provecho de las actividades emprendidas bajo su autoridad, especialmente por la Comisión de Derechos

Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tal vez desee considerar la posibilidad de realizar un examen de las actividades llevadas a cabo a nivel nacional para promover mejores prácticas, determinar las necesidades y fortalecer la cooperación entre los gobiernos y las instituciones de derechos humanos y de desarrollo, así como con otros agentes importantes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hará cuanto esté a su alcance para apoyar esos esfuerzos encaminados a facilitar la habilidad de los gobiernos para promover y proteger los derechos económicos, sociales y culturales.

II. Fortalecer los compromisos en materia de derechos económicos, sociales y culturales

Ratificaciones

9. El progreso que se alcance en la realización de los derechos humanos depende en gran medida de la situación de los compromisos jurídicos contraídos por los Estados en relación con la observancia y el respeto de las normas internacionales. Desde la celebración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, el número de Estados que ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha aumentado en un 17% hasta alcanzar un total de 141 Estados partes. Estas últimas ratificaciones del Pacto constituyen pasos importantes para garantizar que la legislación nacional se ajuste a las disposiciones del Pacto. Sin embargo, hay que señalar que más de la cuarta parte de los países del mundo no ha ratificado el Pacto. En el contexto del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Secretario General y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviaron cartas conjuntas a todos los Jefes de Estado instándolos a que hicieran todo lo posible por ratificar los dos Pactos y las cuatro convenciones principales en materia de derechos humanos en los próximos cinco años. Los países que lo soliciten podrán recibir asistencia técnica y asesoramiento de las Naciones Unidas en relación con el proceso de ratificación.

10. Además del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, otros tratados de derechos humanos desempeñan, directa o indirectamente, un papel importante en la determinación de los compromisos de los Estados. La Convención de los Derechos del Niño contiene disposiciones para la protección y el respeto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La aceptación prácticamente universal de la Convención pone de manifiesto el hecho de que algunos derechos económicos

y sociales han adoptado la forma de derechos jurídicos reconocidos para más de la mitad de los ciudadanos del mundo, los niños. Los Estados que han ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en las que se incluyen referencias expresas a algunos derechos económicos, sociales y culturales concretos, también han contraído obligaciones jurídicas para hacer efectivo esos derechos. Sólo 12 países no han ratificado aún alguno de estos dos tratados, lo que muestra que la red de compromisos jurídicos internacionales en relación con los derechos económicos, sociales y culturales es bastante más amplia de lo que podría asumirse, si se considerara únicamente el número de ratificaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

11. La experiencia acumulada también confirma que los compromisos contraídos únicamente con una categoría de derechos humanos, más tarde o más temprano se convierte en un serio obstáculo para la aplicación de todos los derechos humanos y, por consiguiente, para el desarrollo humano sostenible. *Mutatis mutandis*, ese es el caso de todos los países, desarrollados y en desarrollo. Para que los derechos económicos, sociales y culturales se apliquen de conformidad con las necesidades de la población y el potencial económico real de un Estado, hay que reconocer plenamente la complementariedad de esos derechos con los derechos civiles y políticos. Por consiguiente, el llamamiento para que se ratifiquen los tratados de derechos humanos que se ocupan directamente de los derechos económicos, sociales y culturales debería vincularse al llamamiento para que se ratifiquen otros tratados.

Contenido de las obligaciones

12. Las opiniones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, expresadas en sus observaciones generales, contribuyen a la aclaración del contenido de derechos concretos y las condiciones necesarias para su aplicación, con lo que se explican en forma más específica los compromisos contraídos por los Estados partes con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Durante su 20º período de sesiones, celebrado en mayo de 1999, el Comité examinó y aprobó la observación general No. 11 (1999), "Planes de acción para la enseñanza primaria (artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)" y la observación general No. 12 (1999), "El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11 del Pacto)"¹. En la observación general No. 11 (1999) se destacó la importancia de los planes de acción nacionales para la educación primaria y se pidió a los

Estados partes que no habían podido proporcionar una educación primaria obligatoria y gratuita a que trabajaran con miras a aprobar en el plazo de dos años un plan de acción detallado que condujera a la consecución de su objetivo. En la observación general No. 12 (1999) se afirmó que el derecho a una alimentación adecuada estaba vinculado en forma indivisible e indispensable a la dignidad inherente de la persona humana y era inseparable del ejercicio de otros derechos establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos. El Comité también destacó que las raíces de los problemas del hambre y la malnutrición no eran la escasez de alimentos a nivel mundial, sino la falta de acceso a alimentos disponibles, y señaló que cuando un Estado no garantizaba la satisfacción del nivel mínimo esencial necesario para protegerse contra el hambre, se había producido una violación del Pacto.

13. Otros órganos basados en tratados no limitan su examen al contenido formal de las normas establecidas en los tratados respectivos con el fin de analizar las premisas sociales y económicas de su aplicación. Por ejemplo, al formular una observación sobre el derecho a la vida, el Comité de Derechos Humanos se ha referido a problemas tales como la malnutrición y las epidemias, que vinculan este derecho con el derecho a la alimentación y el derecho a la salud establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales². El Comité de los Derechos del Niño ha contribuido a determinar la estrecha relación que existe entre el ejercicio efectivo de los derechos del niño y la erradicación de la explotación económica. El Comité atribuyó una importancia especial a la educación, que reduce la vulnerabilidad del niño ante todas las formas de explotación. A la vez que interpreta los compromisos contraídos por los Estados en virtud de los tratados respectivos como obligaciones de respetar, proteger o hacer efectivos los derechos humanos, los órganos creados en virtud de tratados exhortan a los Estados a que apliquen una política orientada a la acción dinámica en relación con la realización de los derechos humanos, incluida la prestación de asistencia apropiada a las personas. De ahí que no sólo se vaya precisando más el contenido de los compromisos contraídos por los Estados en las esferas social y económica, sino que los vínculos entre las diferentes categorías de derechos humanos se fortalecen cada vez más. Los órganos creados en virtud de tratados prestan gran atención a los compromisos contraídos por los Estados de cooperar en la promoción y protección de los derechos humanos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha destacado que los Estados partes deberían reconocer el papel esencial de la cooperación internacional y cumplir el compromiso que han contraído para adoptar, conjuntamente y por separado, medidas para lograr

el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales (véanse también los párrafos 33 y 34 *infra*).

Declaración sobre el derecho al desarrollo

14. Las resoluciones de los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas también desempeñan un papel importante en la definición de las responsabilidades de los Estados en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellas, la Declaración sobre el derecho al desarrollo, de 1986, desempeña un papel fundamental. La Declaración, que sitúa a la persona humana en el centro de las actividades de desarrollo y preconiza una visión integrada de todos los derechos humanos, es un vehículo para la indivisibilidad y complementariedad de las diferentes categorías de derechos humanos y para reconocer la promoción y protección de todos los derechos humanos como base y medida del desarrollo sostenible. De ahí que la Declaración haya dado un gran impulso a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

III. Fortalecimiento de la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales

Determinación de las necesidades

15. Resulta muy importante establecer un cuadro objetivo e imparcial de la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales en todo el mundo. Ello es indispensable para determinar las necesidades y las amenazas que surjan, extrapolar las tendencias en la aplicación de los derechos humanos a todos los niveles y, sobre esa base, determinar las esferas prioritarias y los métodos de trabajo. Proporciona a las Naciones Unidas la base para la orientación apropiada de políticas y actividades, en particular en el contexto del fomento de la confianza y de la cooperación técnica a nivel nacional. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destacó que “el primer paso indispensable para promover la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales es el diagnóstico y conocimiento de la situación existente ... La vigilancia tiene por objeto proporcionar una visión general y detallada de la situación existente, y esta visión resulta importante sobre todo porque proporciona una base para elaborar políticas claramente formuladas y cuidadosamente adaptadas a la situación, entre ellas el establecimiento de prioridades que reflejan las disposiciones del Pacto”³.

16. El carácter indivisible de los derechos humanos exige el fortalecimiento de los métodos para verificar la realización, en particular, de los derechos económicos, sociales y cultura-

les. Actualmente esas metodologías son menos eficaces que las que se han elaborado para los derechos civiles y políticos, aun cuando la información social y económica procedente de organismos de desarrollo se esté incorporando cada vez más en los análisis pertinentes. A nivel internacional, es posible lograr progreso, entre otras cosas, si: a) se garantiza que los derechos económicos, sociales y culturales ocupen un lugar adecuado en la labor de los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas, en particular la Comisión de Derechos Humanos; b) se integran los derechos económicos, sociales y culturales en todos los mecanismos de derechos humanos; c) se fortalecen las capacidades para prestar apoyo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; d) se propicia que el mecanismo establecido por la Comisión de Derechos Humanos evalúe la realización del derecho al desarrollo; e) se aprueba un protocolo facultativo sobre comunicaciones individuales dirigidas al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, f) se aplican criterios metodológicos orientados a aumentar la eficacia de las evaluaciones, incluida la elaboración de indicadores y puntos de referencia de importancia para los derechos económicos, sociales y culturales.

Órganos intergubernamentales

17. Es fundamental que se incluyan los derechos económicos, sociales y culturales en los programas de los órganos y entidades de las Naciones Unidas, así como de sus organismos y programas para determinar las necesidades existentes a escala mundial, regional y nacional. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas ha propuesto la celebración de reuniones conjuntas de las Comisiones Segunda y Tercera de la Asamblea General para examinar diversos aspectos de los derechos económicos, sociales y culturales. Durante el quincuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General ambas Comisiones se reunieron para examinar el papel que las Naciones Unidas deberían desempeñar en la erradicación de la pobreza. El Consejo Económico y Social ha dedicado su serie de sesiones de alto nivel de 1999 a la erradicación de la pobreza. En su 55° período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos celebró un diálogo especial que se centró en el problema de la exclusión social de los niños. Hay otros órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social que también prestan mucha atención a esferas que guardan relación con la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, en su 37° período de sesiones, la Comisión de Desarrollo Social, que centró su atención en sus conclusiones convenidas sobre servicios sociales para todos, destacó que la “inversión en servicios sociales contribuirá a la erradicación de la pobreza, la paz, la equidad y la igualdad, el progreso y la cohesión sociales, la productividad económica, el empleo productivo

y la plena participación de toda la población en la sociedad. A ese respecto, es fundamental que los gobiernos, o bien proporcionen servicios sociales, o velen por un acceso universal y equitativo a los mismos, especialmente en épocas de recesión económica”⁴.

18. En sus últimos períodos de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos ha adoptado medidas de importancia para fortalecer la capacidad de ejecución del programa de derechos humanos de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales. En 1998 la Comisión nombró a la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, que presentó su informe inicial en el 55° período de sesiones de la Comisión⁵. Además, los mandatos relativos a aspectos sociales y económicos del desarrollo son de gran importancia para los derechos económicos, sociales y culturales. En ellos se incluyen el experto independiente sobre el derecho al desarrollo; el experto independiente sobre extrema pobreza; el Relator Especial sobre los efectos de la deuda externa en el goce pleno de los derechos económicos, sociales y culturales; el experto independiente sobre los efectos de las políticas de ajuste estructural en el goce pleno de los derechos humanos; el Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; el Relator Especial sobre los efectos nocivos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos para el goce de los derechos humanos; el Grupo de Trabajo sobre el derecho al desarrollo, y el Grupo de Trabajo sobre las formas contemporáneas de la esclavitud. Es fundamental que todos los que tengan mandatos relativos a procedimientos especiales incluyan en sus análisis las posibles consecuencias de los derechos económicos, sociales y culturales para su principal esfera de interés.

19. En su resolución 1998/72, la Comisión de Derechos Humanos estableció un nuevo mecanismo, que incluye el mencionado Grupo de Trabajo de composición abierta entre período de sesiones y el experto independiente, para supervisar la aplicación del derecho al desarrollo. El mandato del experto independiente consiste en estudiar el estado actual de aplicación del derecho al desarrollo y presentar esas conclusiones al Grupo de Trabajo en cada una de sus reuniones. Ese mecanismo puede considerarse un importante instrumento adicional que seguirá de cerca la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que el derecho al desarrollo incorpora un criterio integrado respecto de todos los derechos humanos. El Grupo de Trabajo se reunirá por primera vez en septiembre de 1999.

20. La Comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías ha participado en estudios efectuados para prestar asistencia en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que figura un

estudio sobre el derecho a una alimentación adecuada (recientemente revisada y actualizada), la impunidad de los perpetradores de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales; los indicadores de derechos humanos, los derechos humanos y la distribución de ingresos, y el derecho a la educación. La Subcomisión también está examinando el establecimiento de un foro sobre derechos económicos, sociales y culturales. El propuesto “foro social” se reuniría durante el período de sesiones anual de la Subcomisión, con el fin de intercambiar opiniones sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales; seguir de cerca las situaciones de pobreza, incluida la relación entre la distribución de los ingresos, la feminización de la pobreza y los derechos humanos, y diseminar ampliamente las posibles directrices sobre las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

Órganos creados en virtud de tratados

21. Entre 1985, año en que se estableció, hasta enero de 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha examinado 155 informes iniciales y 74 informes periódicos, así como 60 informes mundiales, y ha elaborado directrices amplias para este proceso⁶. El Comité, que también estudia nuevos métodos de trabajo, llevó a cabo su primera misión en los países centrande la atención en la realización del derecho a una vivienda adecuada⁷. Para cada período de sesiones del Comité se programan debates generales en que participan expertos, representantes de organismos y programas así como relatores especiales. Esos debates apoyan los esfuerzos del Comité por definir mejor el contenido de los derechos económicos, sociales y culturales y elaborar métodos más eficaces para su ejercicio efectivo. Los debates más recientes del Comité se centraron en el derecho a la educación y el derecho a la alimentación.

22. La experiencia técnica acumulada por el Comité, que se basa en el examen sistemático de la realización de los derechos establecidos en el Pacto y en la información suministrada por sus asociados nacionales e internacionales, hace de él un órgano excepcional, tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en la comunidad internacional. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995 se reconoció que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales debería desempeñar un papel importante en el seguimiento de los aspectos de la Declaración y el Programa de Acción que se relacionan con el cumplimiento por los Estados partes de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, los efectos de la labor del Comité están determinados en gran medida por los recursos a su disposición. En su último período de sesiones, refiriéndose al atraso considerable en el

examen de los informes, el Comité destacó que en el marco de los actuales arreglos en relación con sus períodos de sesiones, se necesitarían tres años para examinar los informes atrasados⁸. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha adoptado varias medidas con miras a prestar un mejor apoyo al Comité, especialmente en el marco del Programa de Acción para mejorar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por el Comité en su 15º período de sesiones⁹. El Programa ha sido concebido para prestar apoyo en el proceso de presentación de informes y fortalecer las capacidades analíticas que permitan al Comité aprovechar plenamente la información disponible, establecer enlaces con otros organismos pertinentes, determinar y analizar las nuevas tendencias y preparar materiales de investigación para la elaboración de posiciones de política en relación con las cuestiones fundamentales que el Comité debe abordar. Sin embargo, también se debe considerar la posibilidad de adoptar medidas adicionales, como el aumento de la frecuencia de los períodos de sesiones del Comité.

23. Aunque el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano que se ocupa principalmente de supervisar la realización de esos derechos, otros órganos creados en virtud de tratados pueden contribuir a ese proceso y de hecho lo hacen prestando especial atención a los derechos económicos, sociales y culturales de grupos concretos o situaciones concretas, así como analizando los aspectos económicos, sociales y culturales de la realización de otros derechos. La cooperación entre los órganos creados en virtud de tratados y los que tienen mandatos en materia de procedimientos especiales también es de gran importancia. Las reuniones anuales de los presidentes de los órganos creados en virtud de tratados y de procedimientos especiales incluyen en sus respectivos programas la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En mayo de 1999 esas reuniones coincidieron por primera vez. Los presidentes apoyaron decididamente la idea de celebrar una reunión de trabajo para examinar ampliamente cuestiones relacionadas con los indicadores y los puntos de referencia para medir la aplicación del derecho a la educación (véase párr. 25 *infra*).

24. El procedimiento de las comunicaciones individuales, importante mecanismo que existe en relación con algunos tratados de derechos humanos, no se ha previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aunque el objetivo primario de este procedimiento consiste en ampliar la protección internacional a las personas, esas comunicaciones a menudo también atraen la atención de órganos creados en virtud de tratados y, por ende, de la comunidad internacional hacia la situación existente en un país determinado. En la Declaración y el Programa de Acción

de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se alentó a la Comisión de Derechos Humanos a que, en colaboración con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siguiera examinando la elaboración de protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹⁰. Tras una serie de debates, el Comité presentó un proyecto de protocolo facultativo sobre comunicaciones individuales a la Comisión de Derechos Humanos, que lo transmitió a los gobiernos para que hicieran comentarios. Hasta el momento, sólo un número reducido de gobiernos ha presentado sus opiniones. La aceleración de ese proceso es esencial.

Nuevos criterios metodológicos

25. En la Declaración y el Programa de Acción de Viena se recomendó el examen de un sistema de indicadores para medir los avances hacia la realización de los derechos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como parte esencial de los esfuerzos encaminados a fortalecer el goce de esos derechos¹¹. La integración de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, en el conjunto mundial de indicadores del sistema de evaluación común para los países es un componente importante del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) que dará lugar a la integración práctica de los derechos humanos en los proyectos coordinados de las Naciones Unidas a fin de dar una respuesta más adecuada a las necesidades de los Estados¹². La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está participando en este proceso. En su 55º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 1999/25, en la que pidió a la Alta Comisionada que estudiara la posibilidad de organizar un seminario que tuviera por objeto definir puntos de referencia e indicadores de desarrollo progresivos relacionados con el derecho a la educación. La Oficina está organizando actualmente el seminario, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está cooperando con esta actividad. Se pedirá a otros órganos creados en virtud de tratados, organismos especializados y expertos en la materia que participen en el seminario.

26. En la misma resolución, la Comisión de Derechos Humanos reiteró su llamamiento a todos los Estados para que “consideren ... la conveniencia de elaborar planes de acción nacionales en que se definan las medidas que se han de adoptar para mejorar la situación de los derechos humanos en general con puntos de referencia específicos destinados a hacer efectivos los niveles mínimos y esenciales de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que,

si bien los puntos de referencia mundiales son de uso limitado en muchas esferas, incluida la reducción de la mortalidad infantil, el alcance de la vacunación de los niños, la ingestión de calorías por persona, el número de personas por trabajador de la salud, la adopción de puntos de referencia nacionales o más específicos puede proporcionar una indicación valiosa del progreso alcanzado¹³. Para evitar una flexibilidad inaceptable en la interpretación de los compromisos por el Estado parte, el Comité combinó esta idea con el concepto de un núcleo básico mínimo de obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹⁴. Para estudiar más la aplicación de puntos de referencia en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales, la Oficina del Alto Comisionado organizó una mesa redonda en marzo de 1998 en la que participaron importantes personalidades de los círculos académicos y especialistas y al que asistió un número elevado de representantes de gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Los trabajos sobre el establecimiento de puntos de referencia prosiguen, y los aspectos que se examinan incluyen, entre otros, su aplicabilidad a nivel regional y subregional.

27. También las organizaciones no gubernamentales y otros componentes de la sociedad civil participan cada vez más en el seguimiento de la evolución social y económica. La comunidad académica ha hecho contribuciones a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre otros medios, elaborando dos conjuntos de directrices conocidos como Principios de Limburg sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1986), que en 1997 se incorporaron en las directrices de Maastricht sobre violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

IV. Asistencia a los Estados en la labor de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales

28. En un estudio de los programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos realizado recientemente en todo el sistema por la Oficina del Alto Comisionado se demuestra que cada vez se reconoce de manera más amplia que los derechos económicos, sociales y culturales constituyen la base de una amplia gama de actividades de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organis-

mos y programas que trabajan en ámbitos diversos como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud y la cultura hacen referencia cada vez más a menudo a los derechos económicos, sociales y culturales como conjunto de criterios que determinan el marco de asistencia ofrecido a los países. Ello confiere una orientación más individual, concreta y coherente a los programas de cooperación técnica y facilita la cooperación interinstitucional en la asistencia a los Estados Miembros. El PNUD, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, ha preparado un programa conjunto de fortalecimiento de los derechos humanos (HURIST) que incluye la promoción de un enfoque del desarrollo humano sostenible basado en los derechos humanos, en particular en las esferas de la erradicación de la pobreza, el género, el medio ambiente, el agua y los medios de vida sostenibles; el impulso de la ratificación de los instrumentos básicos de derechos humanos; el fomento del diálogo mundial sobre los efectos de la mundialización para el disfrute de los derechos humanos; y la asistencia a los países que deseen desarrollar su capacidad para promover los derechos humanos.

29. La Oficina del Alto Comisionado está realizando un proyecto especial para integrar los derechos económicos, sociales y culturales en todos los aspectos de las prácticas y procedimientos de cooperación técnica, como recomendó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹⁵. En marzo de 1998, un grupo de expertos examinó la ejecución del proyecto y propuso, entre otras cosas, que el programa incluyera iniciativas de capacitación, educación y sensibilización dirigidas a grupos de población “no tradicionales”, como los funcionarios del gobierno encargados de proporcionar servicios básicos (por ejemplo, agua y educación), y el establecimiento de criterios de referencia sobre el porcentaje de recursos que debe destinarse a los derechos económicos, sociales y culturales. La Oficina del Alto Comisionado se ocupa de manera permanente de la aplicación de esas recomendaciones. En 1999 y el año 2000 se llevarán a cabo programas de capacitación encaminados a desarrollar los conocimientos técnicos existentes sobre incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales en los proyectos de cooperación técnica. La Oficina está también incluyendo esos derechos en los manuales y material metodológico de sus programas de cooperación técnica y actividades sobre el terreno en esa esfera. Por ejemplo, en las directrices sobre entrevistas preparadas recientemente para la operación de emergencia en Kosovo y compartidas por los asociados en las actividades sobre el terreno se hace referencia tanto a los derechos económicos, sociales y culturales como a los civiles y políticos.

30. Las instituciones nacionales independientes de derechos humanos, que actúan de conformidad con los Principios de

París, de 1991 desempeñan una función importante en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en el plano nacional, como destacó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general No. 10 (1998). El Comité señaló que, en muchos casos, esas instituciones llevaban ya a cabo programas de educación e información, realizaban un examen minucioso de las leyes vigentes, determinaban criterios nacionales de referencia, realizaban investigaciones y estudios, vigilaban la aplicación de las normas sobre derechos humanos y examinaban las reclamaciones relativas a la violación de éstos. La Oficina del Alto Comisionado considera que la creación de instituciones nacionales en todas las regiones y el fortalecimiento de las existentes es una cuestión prioritaria. Se está preparando un manual de derechos económicos y sociales con el fin de ayudar a las comisiones nacionales de derechos humanos a incorporar los derechos económicos, sociales y culturales en sus actividades y programas. Además, la Oficina está organizando y copatrocinando diversas iniciativas regionales de capacitación sobre derechos económicos, sociales y culturales dedicadas concretamente a las instituciones nacionales de derechos humanos. En su última reunión, celebrada en abril de 1999, el Comité de Coordinación de las Instituciones Nacionales se ocupó, entre otras cosas, de las cuestiones de la pobreza, la carencia de vivienda y sus consecuencias, las enfermedades mentales, los derechos de las poblaciones indígenas y las políticas necesarias para velar por la igualdad de oportunidades para la mujer.

31. En la tercera reunión anual del Foro de instituciones nacionales de derechos humanos de Asia y el Pacífico, celebrada en Indonesia en septiembre de 1998, se examinaron los efectos de la reciente crisis económica para los derechos económicos, sociales y culturales y se instó a todos los gobiernos a cumplir explícitamente su compromiso relativo a la indivisibilidad de los derechos humanos, incluida su aportación a las políticas y medidas de las instituciones financieras internacionales y de otros foros económicos internacionales y regionales como la Organización Mundial del Comercio y el Consejo de Cooperación Económica en Asia y el Pacífico. En un seminario celebrado en mayo de 1999 en Filipinas y copatrocinado por la Oficina del Alto Comisionado se debatieron los problemas relacionados con la integración de los derechos económicos, sociales y culturales en la labor de las comisiones nacionales de derechos humanos.

32. Con ocasión del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado puso en marcha el proyecto Ayuda Conjunta a Comunidades (ACC), ejecutado en colaboración con el PNUD y con el apoyo de los gobiernos. En el marco de ese

proyecto se hacen pequeñas donaciones a iniciativas locales de derechos humanos. Muchos de esos proyectos se inscriben en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales. Los alentadores resultados de las iniciativas que recibieron apoyo en la primera fase del proyecto han hecho posible que éste prosiga, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la colaboración internacional.

V. Establecimiento de asociaciones de colaboración

Cooperación internacional

33. En la línea de los compromisos derivados de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos sienta las bases de la cooperación internacional en pro de los derechos humanos al afirmar en el artículo 28, que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos”. Ese principio se reafirmó tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en la Declaración sobre el derecho al desarrollo.

34. En las conferencias y cumbres mundiales celebradas durante el decenio de 1990, la comunidad internacional reiteró su voluntad de desarrollar la cooperación en el ámbito de los derechos humanos. Si bien cada Estado es el responsable principal de asegurar el ejercicio de todos los derechos humanos en el plano nacional, la comunidad internacional debe atender las necesidades de los Estados en materia de asistencia. Esto se destacó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993 al afirmarse, en la parte I de la Declaración y Programa de Acción de Viena, que el fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos es esencial para la plena realización de los propósitos de las Naciones Unidas. En el primer compromiso de la Declaración de Copenhague, aprobada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, los gobiernos se comprometieron a cooperar para crear un entorno político, jurídico y administrativo favorable para el ejercicio de todos los derechos humanos. Los documentos finales de las conferencias y cumbres mundiales proporcionan también una orientación importante en la labor de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. El marco para el seguimiento coordinado de las conferencias y cumbres mundiales, elaborado bajo la dirección del Consejo Económico y Social, constituye un instrumento operacional útil para continuar integrando esos derechos en las actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas. Es esencial que el examen de la aplicación de las recomendaciones

aprobadas en las conferencias y cumbres mundiales de las Naciones Unidas se aproveche para examinar las políticas y programas destinadas a hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.

Integración de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema de las Naciones Unidas

35. El programa de reforma del Secretario General, en que se reafirmaba que los derechos humanos son una cuestión intersectorial del sistema de las Naciones Unidas, ha contribuido a que aumenten las iniciativas en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Una vez incluidos los derechos humanos en el programa de todas las estructuras importantes de gestión el sistema entero de las Naciones Unidas está en mejores condiciones de proporcionar apoyo sustantivo a la labor de hacerlos efectivos. En las conclusiones convenidas 1998/2 del Consejo Económico y Social destacó la necesidad de que los organismos cooperaran para promover los derechos económicos, sociales y culturales. En los informes sobre la aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Viena presentados por el Secretario General a los períodos de sesiones sustantivos de 1998 y 1999 de éste y las conclusiones convenidas del Consejo figura un examen de ese proceso¹⁶.

36. Cada vez se tiende a considerar de manera más generalizada que el enfoque basado en los derechos, expuesto en la Declaración sobre el derecho al desarrollo, constituye la base sobre la cual establecer un entorno internacional propicio. Los organismos y programas de las Naciones Unidas reconocen que las normas internacionales sobre derechos humanos constituyen unos criterios precisos y firmes aplicables en la formulación de políticas y la adopción de medidas que se basan en el reconocimiento de los derechos de los titulares y la responsabilidad correspondiente de quienes deben hacerlos efectivos. Está extendida la opinión de que aplicando al desarrollo el enfoque basado en los derechos se asegura la sostenibilidad, así como la participación en el desarrollo y el disfrute de éste en forma equitativa. Por ejemplo, en el debate sobre la crisis económica reciente se señaló con frecuencia que las consecuencias negativas de la crisis para las personas podrían haberse reducido, e incluso evitado, de haberse estudiado debidamente en su momento la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado se ha comprometido a colaborar estrechamente con todos los asociados para hacer aportaciones sustantivas a la integración de los derechos humanos en las políticas y medidas socioeconómicas.

37. La erradicación de la pobreza es, entre otras, una cuestión de importancia fundamental para los derechos económicos, sociales y culturales. En las conclusiones

convenidas aprobadas por el Consejo Económico y Social en 1996 se proporcionaba orientación para las iniciativas de lucha contra la pobreza en todo el sistema¹⁷. En 1998, el Comité Administrativo de Coordinación aprobó la Declaración de compromiso en pro de la erradicación de la pobreza, compromiso internacional clave y objetivo esencial del sistema de las Naciones Unidas. El Comité destacó que la pobreza niega opciones y oportunidades, y constituye una violación de la dignidad humana. El PNUD, el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el UNICEF y otros organismos y programas han elaborado planes para eliminarla. La experta independiente sobre la pobreza extrema presentó su primer informe en el 55º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos; en él recomendaba, entre otras cosas, que toda legislación nacional garantizara un ingreso mínimo y que se dedicara el 0,7% de los presupuestos nacionales a la asistencia oficial para el desarrollo¹⁸.

38. El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como principal estructura de políticas y coordinación de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo, se ha convertido en una de las principales plataformas para promover la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. La Oficina del Alto Comisionado preside el grupo especial sobre el derecho al desarrollo del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que, entre otras cosas, está preparando un método para fortalecer la vertiente relacionada con los derechos humanos en las actividades de desarrollo y programa de capacitación del personal de las Naciones Unidas en el derecho al desarrollo y sus repercusiones para el desarrollo sostenible. El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual se establece un sistema que permite proseguir el trabajo en equipo para atender las prioridades de países concretos en materia de desarrollo, desempeñará una función esencial en la labor de determinar las necesidades relativas a los derechos económicos, sociales y culturales y atenderlas de manera coordinada. Como participación en ese proceso, la Oficina del Alto Comisionado ha preparado la parte correspondiente a los derechos humanos del proyecto de directrices del Comité Administrativo de Coordinación para los coordinadores residentes.

39. En 1998 se publicaron dos importantes documentos sobre la integración de los derechos humanos en la esfera del desarrollo. El PNUD publicó un documento normativo titulado "Integrating human rights with sustainable human development" (Integración de los derechos humanos con el desarrollo humano sostenible) y el Banco Mundial publicó "Development and human rights: the role of the World Bank" (Desarrollo y derechos humanos: el papel del Banco Mun-

dial). Los documentos tratan de la dimensión de derechos humanos de las actividades de las organizaciones respectivas, particularmente en las esferas de la pobreza, los recursos humanos, la gestión de los asuntos públicos y el ordenamiento jurídico. Los intensos contactos subsiguientes entre las dos instituciones y la Oficina del Alto Comisionado mostraron que el planteamiento integrado de los derechos humanos y el desarrollo económico y social se estaba haciendo una realidad. La cooperación entre la Oficina del Alto Comisionado y el PNUD llevó a la firma en 1998 de un memorando de entendimiento (véase también el párr. 28 *supra*). De la evaluación anual que se ha hecho recientemente de su aplicación se desprende que las dos partes han logrado progresos importantes en sus esfuerzos de cooperación en la esfera de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. En diciembre de 1998, la Alta Comisionada visitó el Banco Mundial para examinar posibilidades de cooperación. Representantes del Banco Mundial participaron en la labor de la Comisión de Derechos Humanos y algunos de sus grupos de trabajo, y mantuvieron relaciones de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado.

40. En el marco de la aplicación de las recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma el 15 de noviembre de 1996, la Oficina del Alto Comisionado ha cooperado con la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, así como con organizaciones no gubernamentales¹⁹ y expertos, para determinar el contenido del derecho a una alimentación adecuada y la manera de asegurar el ejercicio de ese derecho. La Oficina del Alto Comisionado y la FAO organizaron una reunión de expertos para examinar el contenido básico del derecho a una alimentación adecuada, que se celebró en Roma en noviembre de 1998. La FAO también ha publicado documentos sobre ese derecho. La Oficina del Alto Comisionado auspició una reunión del Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación, que se celebró en Ginebra en abril de 1999 y, en cooperación con el Subcomité, organizó un simposio sobre sustancia y políticas de un enfoque basado en los derechos humanos de las políticas y la programación alimentaria y de nutrición²⁰.

41. En marzo de 1999 Hábitat y la Oficina del Alto Comisionado organizaron conjuntamente una reunión de expertos sobre los aspectos prácticos del derecho humano a una vivienda adecuada. Los participantes determinaron las esferas que requerían atención urgente por parte de la comunidad internacional y recomendaron, entre otras cosas, la designación de un relator especial sobre el derecho a la vivienda y la adopción de las directrices completas para los derechos humanos en relación con los desplazamientos basados en el desarrollo. Se alentó a los órganos creados en virtud de

tratados, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a que redacte nuevas recomendaciones generales sobre el derecho a la vivienda. También se acordó que Hábitat y la Oficina del Alto Comisionado elaborarían un proyecto experimental sobre el derecho a la vivienda en el marco de una de las actuales operaciones de derechos humanos sobre el terreno.

42. La cooperación entre el Programa conjunto y de copatrocinio de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y la Oficina del Alto Comisionado en los aspectos del desarrollo relacionados con la salud ha comprendido la difusión de las Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos; la revisión y reforma de la legislación penal y los sistemas penitenciarios con miras a proteger los derechos de las personas afectadas por el VIH/SIDA, realizadas por el PNUD y la Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito; y la integración de las directrices internacionales en las políticas y actividades de los órganos y programas de las Naciones Unidas. Las actividades interinstitucionales de cooperación y coordinación prosiguen bajo la dirección del Programa conjunto. El PNUD participa también en esa esfera en el contexto del aumento de la capacidad nacional²¹.

Cooperación regional

43. Varios ejemplos permiten apreciar las numerosas medidas tomadas para promover y proteger los derechos económicos, sociales y culturales en el plano regional. La Carta Social Europea establece un sistema para la protección de esos derechos y ha adoptado también un mecanismo para las reclamaciones colectivas. Un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) establece todos los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. Con arreglo a ese protocolo, el derecho a organizar sindicatos y el derecho a la educación pueden ser objeto de peticiones individuales. En la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Organización de la Unidad África integró en un único documento los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. La Declaración de El Cairo sobre los derechos humanos en el Islam, de 1990, también combina referencias a ambos tipos de derechos.

44. Las actividades de derechos humanos en los planos regional, subregional y nacional son esenciales porque se basan en el conocimiento que personas locales tienen de las cuestiones prioritarias que se han de considerar, así como de la manera en que se podrían afrontar. La cooperación regional ayudará también a remediar el déficit de capacidad debido a la disparidad entre el creciente interés de los países por

obtener asistencia internacional y los limitados recursos con que cuentan las instituciones, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado, para responder a ese interés. Por consiguiente la Oficina, que seguirá ampliando su estrecha cooperación con las organizaciones regionales de derechos humanos, se propone intensificar su programa de cooperación a nivel regional y subregional, que estará orientado en buena parte hacia los derechos económicos, sociales y culturales. La experiencia obtenida en la región de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo y los cursos prácticos regionales para Asia y el Pacífico, en particular las reuniones celebradas en Teherán en 1998 y Nueva Delhi en 1999, han demostrado claramente que ese planteamiento puede mejorar la eficacia de los esfuerzos de las Naciones Unidas por promover y proteger los derechos humanos y asegurar una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Las consultas y la información provenientes de todas las regiones indican gran interés por este tipo de cooperación regional y subregional.

45. El séptimo encuentro de Asia y el Pacífico para la promoción y la protección de los derechos humanos, celebrado en Nueva Delhi en febrero de 1999, contó con la participación de representantes de 30 países de la región y fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado en cooperación con el Gobierno de la India. En el encuentro se determinaron cuatro esferas clave para la promoción y protección de los derechos humanos en la región: a) la elaboración de planes nacionales de acción para la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las capacidades nacionales; b) la educación en la esfera de los derechos humanos; c) las instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos; y d) las estrategias para lograr el ejercicio efectivo del derecho al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales. En el encuentro se mantuvo un debate sobre los derechos económicos, sociales y culturales y se recomendó posteriormente que el encuentro entre períodos de sesiones sobre el derecho al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales se centrara, entre otras cosas, en la elaboración de normas de referencia cuantificables; la determinación de los obstáculos al ejercicio efectivo de esos derechos; y la presentación de propuestas sobre medidas para fortalecer la capacidad nacional para promover y proteger esos derechos.

Cooperación con la sociedad civil

46. Las organizaciones no gubernamentales internacionales, que se interesan a menudo por los derechos civiles y políticos, en los últimos años también se han dedicado a propugnar la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Organizaciones no gubernamentales como

OXFAM, el Centro para los Derechos Económicos y Sociales, el centro de desalojos y el derecho a la vivienda y Food First International Action Network son sólo algunas de las principales organizaciones que han adquirido considerable experiencia en esta esfera. Es alentador, asimismo, que un número cada vez mayor de organizaciones no gubernamentales locales también se esté interesando por los derechos económicos, sociales y culturales.

47. El foro mundial de organizaciones no gubernamentales sobre derechos humanos "Viena Más Cinco" examinó en detalle los problemas relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales y formuló varias recomendaciones. El foro destacó que esos derechos no eran simplemente metas a las cuales se podía aspirar, sino tenían el mismo estatuto, importancia y significado para la dignidad, el desarrollo y bienestar humanos que los derechos civiles y políticos. Se destacó en particular el efecto negativo de la mundialización en los derechos económicos, sociales y culturales, y la necesidad de hallar respuestas a ese proceso.

48. En febrero de 1999, la Oficina del Alto Comisionado y la Comisión Internacional de Juristas organizaron un curso práctico sobre el proyecto de protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más de 60 representantes de misiones permanentes ante las Naciones Unidas en Ginebra participaron en un debate oficioso.

49. El programa sobre la ciencia y los derechos humanos de la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia y el Sistema Internacional de Información y Documentación sobre Derechos Humanos han emprendido un proyecto de tres años de duración para la vigilancia de las violaciones graves de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre los objetivos del proyecto figura la elaboración de herramientas y recursos para vigilar esas violaciones. El proyecto usará ampliamente la Internet para prestar capacitación y asistencia técnica.

Cooperación con el sector empresarial

50. Resulta cada vez más claro que muchas decisiones empresariales pueden afectar profundamente la dignidad y los derechos de personas y comunidades. Si bien el libre comercio y la competencia mundiales han permitido a algunos países aumentar espectacularmente su riqueza nacional total, otros países se están empobreciendo o sólo logran, a duras penas, mejoras mínimas. Un motivo de creciente preocupación en países tanto desarrollados como en desarrollo es la brecha cada vez mayor que separa a los ricos de los pobres, aún cuando la riqueza total aumenta. Las causas de esas tendencias son complejas y variadas, pero es necesario

encarlarlas. El sector empresarial se encuentra en el centro del actual proceso de mundialización y le interesa resolver esos problemas de una manera que demuestre a los ciudadanos de todos los países que la comunidad tiene un lugar para todos y que se respetan todos los derechos humanos fundamentales. Afortunadamente, muchos dirigentes empresariales están reconociendo que la viabilidad a largo plazo de sus actividades empresariales y la protección futura del valor para los accionistas dependen de la estabilidad de un entorno político regido por un ordenamiento jurídico basado en los derechos humanos.

51. Fue sobre la base de esas consideraciones que el Secretario General, Kofi Annan, propuso a los empresarios internacionales reunidos en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) en enero de 1999, un “Pacto Mundial” de valores y principios compartidos, para dar un rostro humano al mercado mundial. El Secretario General exhortó a los empresarios a que, por conducto de sus empresas y asociaciones empresariales, hicieran suyos y apoyaran un conjunto de valores básicos en las esferas de los derechos humanos, las normas laborales y el medio ambiente. En relación con los derechos humanos, el Secretario General pidió a los empresarios que apoyaran y respetaran la protección de los derechos humanos internacionales en su esfera de influencia y se aseguraran de que sus propias empresas no fueran cómplices en abusos de derechos humanos.

52. El objetivo inmediato del “Pacto Mundial” es incorporar valores universales en las declaraciones de las misiones de las empresas, cambiar las prácticas de gestión para aplicar esos valores y compartir las experiencias adquiridas. El Secretario General ha pedido a los tres organismos de las Naciones Unidas directamente interesados, a saber, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina del Alto Comisionado, a que estén listos para ayudar al sector empresarial en la materia y facilitar un diálogo entre el sector empresarial y otros grupos sociales. Un número creciente de asociaciones y sectores empresariales, así como distintas empresas, ya está creando o revisando declaraciones de principios y códigos de conducta empresariales y emprendiendo iniciativas en el ámbito de industrias concretas para aumentar la conciencia de esas cuestiones y vigilar la observancia de normas concretas. Esas iniciativas son ejemplos alentadores de lo que se puede hacer.

53. La Oficina del Alto Comisionado está llevando a cabo actividades complementarias de la iniciativa del Secretario General en dos esferas. En primer término, la Oficina está estableciendo relaciones de cooperación con asociaciones empresariales como Business for Social Responsibility, the Prince of Wales Business Leaders Forum, el Consejo Empre-

sarial Mundial de Desarrollo Sostenible y otras, para alentar la adopción de iniciativas empresariales. La Oficina también está procurando lograr la participación de sindicatos y organizaciones no gubernamentales en dicha actividad. En segundo término, teniendo presente que la protección de los derechos humanos incumbe principalmente a los gobiernos, la Oficina está examinando la cuestión de la responsabilidad internacional de presuntas violaciones empresariales de los derechos humanos. La Alta Comisionada ha pedido a los seis órganos creados en virtud de tratados sobre derechos humanos y a los relatores especiales y grupos de trabajo que estudien, dentro de sus mandatos, la mejor manera de promover esa responsabilidad.

54. La Comisión de Derechos Humanos y su Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías participan también en el examen de la cuestión. En su resolución 1998/8, la Subcomisión decidió establecer, por un período de tres años, un grupo de trabajo del período de sesiones, con el mandato de examinar los efectos de los métodos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo, así como de los derechos civiles y políticos, y formular recomendaciones al respecto. El grupo de trabajo se reunirá por primera vez durante el período de sesiones de 1999 de la Subcomisión. Cabe señalar, en particular, que en el último período de sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo se aprobó la nueva convención contra las peores formas del trabajo infantil.

VI. Conclusiones

55. El ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales sigue siendo una meta difícil de alcanzar. En el presente informe se ha procurado indicar las principales tendencias internacionales en la materia. Si bien los ejemplos presentados en el informe hacen pensar que nos encontramos en el camino correcto para establecer y fortalecer los mecanismos necesarios para promover y proteger los derechos económicos, sociales y culturales, también es cierto, lamentablemente, que estamos lejos de poder ver los resultados de esos esfuerzos en un mejoramiento general en las vidas de los seres humanos. En los albores de un nuevo siglo, es preciso que las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales se consideren como una afrenta a la dignidad humana. Lo que es igualmente importante, su ejercicio debe considerarse una parte esencial de la construcción de un orden económico y social nacional basado en la seguridad, la libertad y la igualdad humanas.

56. Los derechos económicos, sociales y culturales son compromisos jurídicamente vinculantes asumidos por los gobiernos, y las Naciones Unidas están cada vez más preparadas para ayudar en los esfuerzos nacionales por dar cumplimiento a esas obligaciones. En la actualidad las Naciones Unidas no sólo realizan la importante labor de vigilar las políticas y prácticas de derechos humanos a nivel nacional sino también prestan apoyo práctico a los gobiernos para mejorar la capacidad nacional de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es evidente que esa asistencia debe estar orientada cada vez más a ayudar a los gobiernos a tomar decisiones normativas y presupuestarias bien fundamentadas, lo que puede facilitar el disfrute de esos derechos. Ello requiere la participación tanto de los programas de derechos humanos como de los programas de desarrollo de las Naciones Unidas.

57. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos de los Estados y la asistencia proporcionada por el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas, será imposible lograr progresos duraderos en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales sin una cooperación internacional más amplia. La Carta de las Naciones Unidas estableció el principio fundamental de la acción conjunta para asegurar el respeto de los derechos humanos. Nuestro desafío actual es elaborar y apoyar planteamientos nuevos que permitan que dicha cooperación tenga resultados tangibles. Ello exigirá la dedicación y los recursos de todos: los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector empresarial.

58. Las Naciones Unidas deben asumir un papel rector en la formulación de nuevas medidas para asegurar un ejercicio más efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es preciso determinar metas realistas pero ambiciosas que se podrían alcanzar en plazos razonables. El examen de la aplicación de las recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague + 5) y el seguimiento coordinado de las conferencias y cumbres mundiales de las Naciones Unidas podrían proporcionar un marco para la determinación de metas, el esbozo de nuevos planteamientos y el establecimiento de asociaciones de apoyo. El Consejo Económico y Social podría desempeñar un papel importante en esta tarea. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos proseguirá sus esfuerzos para contribuir a un progreso real en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Notas

¹ Véase E/C.12/1999/4 y 5. En sus observaciones generales, el Comité aclaró también el contenido del derecho a una vivienda adecuada (No. 4); el derecho a una vivienda

adecuada en el contexto de los desalojos forzados (No. 7); y los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad y las personas de edad (Nos. 5 y 6, respectivamente). El Comité formuló también observaciones, entre otras cosas, sobre la índole de las obligaciones de los Estados Partes (No. 3) y la aplicación interna del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (No. 9).

² Véase la Observación General No. 6 del Comité de Derechos Humanos, *Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/37/40)*, anexo V.

³ Observación general No. 1 (1989) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1989, Suplemento No. 4 (E/1989/22)*, anexo III.

⁴ *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1999, Suplemento No. 6 (E/1999/26)*, cap. I.D, anexo.

⁵ E/CN.4/1999/49.

⁶ E/C.12/1991/1.

⁷ En abril de 1995 algunos miembros del Comité visitaron Panamá y en septiembre de 1997 algunos miembros visitaron la República Dominicana.

⁸ E/1999/L.19, párr. 3.

⁹ E/1997/22, cap. VII.

¹⁰ Declaración y Programa de Acción de Viena, A/CONF.157/24 (Part II), párr. 75.

¹¹ *Ibíd.*, párr. 98.

¹² *Ibíd.*, párrs. 40 y 41.

¹³ Observación General No. 1 (1989) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1989, Suplemento No. 4 (E/1989/22)*, anexo III, párr. 6.

¹⁴ Observación General No. 3 (1990) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1991, Suplemento No. 3 (E/1991/23)*, anexo III, párr. 10.

¹⁵ *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1995, Suplemento No. 3 (E/1995/22)*.

¹⁶ Véanse los informes titulados “Coordinación de las políticas y actividades de los organismos especializados y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con el seguimiento y la aplicación coordinados de la Declaración y Programa de Acción de Viena” (E/1998/60) y “Aplicación de las conclusiones convenidas 1998/2 del Consejo Económico y Social sobre el seguimiento coordinado y la aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Viena” (E/1999/83).

¹⁷ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 3 (A/51/3/Rev.1)*, cap. III, párr. 2, conclusiones convenidas 1996/1.

¹⁸ E/CN.4/1999/48.

¹⁹ E/C.12/1999/5.

²⁰ *Ibíd.*, párr. 14.

²¹ Véase también el informe del Secretario General presentado a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1999/76).
